

La ética pública y las amenazas de la república lobbysta*

Manuel Dammert

UNO DE LOS DESAFÍOS DEL PERÚ es la transformación de su res-pública, de su modalidad de comunidad política para resolver los asuntos comunes de la nación. En los años del bicentenario de la independencia, están en pugna la República de Ciudadanos con la República Lobbyista. Se contraponen las distintas versiones de la ética pública, componente indispensable de las sociedades nacionales.

Nación, democracia y ética pública

Tengo la convicción que la querrela por supuesta difamación, entablada en mi contra por Pedro Pablo Kuczynski y la poderosa campaña para imponerla, evidencia que he tocado una fibra muy sensible en la actual situación estratégica del país. No es sólo esta querrela, sino otras similares, todas las cuales tienen que ver con la relación entre las actuales élites del poder económico-político y la ciudadanía, en las que están implicadas la ética pública y los recursos de la nación. Los asuntos de mis denuncias tratan los ejes de la actual reformulación del poder nacional, en momentos

* Este artículo está escrito en base a lo que he publicado en el libro titulado: *La República Lobbyista. Desnacionalización, corrupción y recorte de libertades ciudadanas, amenaza contra la democracia peruana en el siglo XXI*. Manuel Dammert. Lima, 2009.

que una neo-oligarquía está pugnando por recomponerla para su dominio. Lo que se expresa, dicho en síntesis, es la amenaza de la república lobbyista contra los avances transformadores de la democracia nacional, que reclama la ética pública y el poder de la ciudadanía.

La historia patria esta jalónada por estas circunstancias. Desde el virreinato, la corruptela se institucionaliza como patrimonialismo colonial, al designarse las autoridades en base a comprar el cargo público, por el cual pagaban un monto a la corona española. Se asumía el cargo como propiedad que daba derecho a enriquecerse con los bienes comunes, especialmente con los de las repúblicas de indios.

Este patrimonialismo colonial, como «ética pública» del poder, continúa en el nuevo estado nación que se forma desde 1821. La nación recién formada incluía sólo a una minoría criolla, a la cual se reducía el universo restringido de la ciudadanía. Esta élite configuraba la República, si bien democrática, pero en función de sus intereses particulares. La historiadora Carmen Mac Evoy ha denominado a este periodo de nuestra historia, el de la República Militar Guanera. En ella, los cargos eran ocupados por militares y un puñado de altos funcionarios que se apropiaban, personalmente y por familias, de súbitas riquezas del erario nacional, como lo fue la riqueza del guano y del salitre, para erigirse en oligarquías, las que incluso tenían la pretensión de ser «aristocráticas», es decir, basadas en algún fabulado y auto designado «merito» de raza, sangre o cultura. Pardo y su singular civilismo, no cambiaron esta circunstancia general. El desastre nacional, ante la exclusión de las mayorías de la nación y por la configuración de la República Militar Guanera como ética pública de enriquecimiento, lo vivimos en la dramática derrota del Perú en la Guerra del Pacífico del siglo XIX.

La reconstrucción del Perú a inicios del siglo XX, pudo haber tenido otro destino, si es que la presencia de las masas

en la República, la hubiese transformado, especialmente con las grandes propuestas de cambio social y moral, que movilizaron a la población y ampliaron derechos de ciudadanía en las décadas de 1910 a 1930. La Patria Nueva de Leguía, la Restauración de Odría, el Pradismo y la posterior Convivencia, son coaliciones distintas de la misma República Oligárquica. Es cierto que se reorganiza el Estado, ampliando sus relaciones administrativas institucionales. Pero se lo hace instrumento directo de la formada oligarquía, que había logrado afianzar sus bases de poder económico en la propiedad terrateniente de la tierra, en especial de las grandes haciendas de la costa, y en el aprovechamiento de los recursos fiscales que ahora el Estado obtenía de enclaves en la explotación de recursos naturales, como el caucho, petróleo, minería y pesca. El Estado se organiza como instrumento directo de hegemonía oligárquica, expresado en la implantación política de dictaduras militares y democracias recortadas, en la pretensión de inclusión homogenizante de algunos sectores sociales anteriormente excluidos. Pero, especialmente, en la continuación de la ética pública del patrimonialismo, usando los cargos públicos para enriquecerse apropiándose de los recursos de la nación. Le otorga a la autoridad la aureola que «roba pero hace obra», como criterio de legitimidad, lo que ciertamente era discrecionalidad reducida en forma férrea a los círculos del poder.

La República Oligárquica entra en crisis a partir de 1970, por diversos factores, principalmente por la ampliación de los derechos conquistados por la ciudadanía y los cambios en la estructura económica social del país. El marco mundial es otro, por vivirse el inicio de lo que constituye el paso a la nueva era digital, y la organización hegemónica del sistema mundo global.

En el Perú se derrumba la propiedad de la tierra como fuente de poder de la oligarquía, la que es desbordada por las movilizaciones campesinas y las reformas agrarias. La población migra masivamente a las urbes, y auto construye las diversas ciudades

sin que exista una base productiva industrial en ellas. Se amplía la ciudadanía y se conquistan sucesivamente mayores derechos civiles, sociales, políticos y económicos, como el derecho a voto de mujeres, analfabetos y jóvenes; los derechos laborales y de sindicalización; los derechos a la educación, la salud y las pensiones; los derechos de organización, asociación, prensa y opinión. Se amplía la producción mercantil simple y niveles de manufacturas, con micro y pequeñas empresas, en el campo y la ciudad, articulándose espacios regionales y sistemas nacionales. Son mayores los recursos naturales puestos en explotación, al tiempo que se resquebraja el sistema de enclaves cerrados para la explotación de dichos recursos, que dejaba migajas para que sean repartidos entre los que estaban en el poder, empezando a reclamarse los derechos de la nación sobre el territorio y sus recursos, como el petróleo.

Esta revolución de ciudadanía, es el trasfondo de la quiebra definitiva del poder oligárquico. Produjo un cambio fundamental en la ética pública. Los cargos y funciones públicas estatales, se empezaron a formular en función de servir a la sociedad, no para enriquecerse privadamente. Se habían democratizado las relaciones sociales y se avanzaba en la lucha anticorrupción. No obstante, no logró transformarse el Estado. No se transformó la República con la democracia ciudadana. Los fastos y formas de la república oligárquica pervivieron. La dictadura militar reformista de Velasco, fue reemplazada por una dictadura militar de derecha. La nueva Constitución de 1979, reconociendo varios derechos y nuevas condiciones del país, no logró transformar completamente los rasgos oligárquicos de la República.

Las grandes movilizaciones de los años 70 y 80, abrieron nuevamente las posibilidades de un cambio social en democracia, desde el poder del sufragio, y en las nuevas condiciones pluriétnicas de la nación y de transformación de la ciudadanía. Pero la crisis económica que redujo la base industrial manufacturera y que

parceló el agro, las limitaciones del movimiento de ciudadanía para organizar la transformación política democrática de la república, los efectos del terrorismo, y los fracasos gubernamentales, fragmentaron la sociedad. En medio de la extensión de la informalidad y la despolitización, desde el poder se dio impulso a una ética pública basada en el pragmatismo para el uso y apropiación privada de recursos públicos, como acto legítimo de sobrevivencia.

Esta situación fue aprovechada para la instalación de la República Autocrática Neoliberal de Fujimori, de 1992 al 2000. He publicado un libro de sus tropelías, con las pruebas de su generalizado sistema de corrupción, titulado *El Estado Mafioso*¹, al que me remito. Respecto a este libro no he tenido querrela alguna formulada por nadie. Más bien, fue muy útil en la investigación parlamentaria, y en los procesos que están a la base de los juicios que actualmente se le sigue a Fujimori en el Poder Judicial.

La República Autocrática quiso cambiar el eje del poder para afirmarlo en la alta burocracia política y militar, vinculada al narcotráfico. Instaló los más avanzados sistemas de poder de la era digital, para la vigilancia disciplinaria y el control mediático de las sociedades. Buscó deformar a los ciudadanos en súbditos clientelistas, a través de generalizar la coima, el robo tinterillesco en la cosa pública, como ética corrupta pragmática y segmentada, en idea que «donde todos roban, nadie es ladrón». Impuso un Estado mafioso, hipercentralista y manejado desde un gobierno oculto, militar y vinculado al narcotráfico. Trató de generar una nueva élite, la que desde el poder y con el neoliberalismo, se apropiaba de los privatizados activos públicos, de los recursos fiscales y de los bienes de la nación, para buscar hacer eterna la duración de la Autocracia Neoliberal.

¹ Dammert, Manuel. *El Estado Mafioso, Fujimori-Montesinos. El Poder Imagocrático en las sociedades globalizadas*. Lima: El Virrey, 2001.

La democracia nacional entre dos repúblicas y la amenaza de la República Lobbysta

La República Autocrática Neoliberal fue derrumbada por un inmenso, fresco, renovador y generoso movimiento ciudadano, que rompió los miedos, y replanteó los asuntos públicos de la nación, para una efectiva transformación democrática. No cayó la autocracia por implosión, desde su crisis interna. Fue derrumbada por las luchas ciudadanas. Esto es lo que explica la importancia crucial de la lucha anticorrupción, con la reafirmación de la ética pública ciudadana. La larga lucha de las fuerzas democráticas y patrióticas, desde 1992, fue creciendo y tenía como uno de sus ejes fundamentales, la lucha contra la corrupción de la Autocracia. Esta lucha fue catapultada al centro de la escena pública y afianzada su legitimidad ganada en las calles, con el develamiento instantáneo y masivo del ejercicio del poder mafioso, presentado a millones de peruanos al transmitirse los vladivideos, en los que se apreciaba la profundidad de la crisis y a los diversos sectores del gobierno oculto, de políticos, militares, burócratas, empresarios, en sus corruptelas con los bienes de la nación.

Por el derrumbe de la Autocracia con la movilización ciudadana, es que la lucha contra la corrupción tuvo un momento clave con el Gobierno de Transición del 2000-2001, presidido por Valentín Paniagua. En este gobierno, se organizó un sistema judicial anti corrupción, y se iniciaron los juicios a la corrupción autocrática. Se puso en la cárcel a la mayor cantidad de mandos militares, empresarios y burócratas, que formaban el cogollo mafioso de la autocracia. Este acto inédito en la historia de la república, afirmó las proyecciones de una nueva ética pública basada en los derechos de los ciudadanos.

Para el desarrollo de la nación plural, era indispensable avanzar hacia la transformación democrática nacional con la República de Ciudadanos. Pero el poder económico mercantilista,

afianzado en los años de la República Autocrática Neoliberal, no lo permitió. Utilizando todos los diversos recursos y resortes del poder, se empezó a imponer la República Lobbyista para deformar el afán democrático de la sociedad. El nuevo gobierno de Toledo se entrampó, y devino rápidamente en un gobierno manejado desde el poder económico neoliberal, con el grupo de Pedro Pablo Kuchinsky (PPK) como artífice central. El 2006 fue elegido el gobierno de Alan García, sustentado en una alianza con la extrema derecha fujimorista, el poder económico mercantilista y la alta burocracia formada desde los años 90. Del 2006 a la fecha, ha seguido el curso, acentuado, de la instalación de la República Lobbyista. Incluso adquiere un ideario, resumido en el programa de gobierno de lo que se ha denominado El Perro del Hortelano, en referencia al título de las ideas sobre la nación de García. Este repite las tesis librecambistas del siglo XIX, las sazona con el armazón neoliberal fracasado en el tránsito el siglo XX al XXI, para buscar ser el epítome programático de la nueva élite que busca su lugar para instalarse en la República Lobbyista.

La República Lobbyista es una forma específica de pretender organizar como Estado a la comunidad política de la nación. Retoma el exclusivismo oligárquico del círculo de poder, y continúa el gobierno oculto y de reglas de la Autocracia Neoliberal. Desvirtúa la democracia, al extraer de lo público la soberanía y las decisiones sobre bienes comunes, transformando en espectáculo banal la política ejercida en el Congreso, y otros cuerpos de representación. Pretende someter al pueblo, recortando sus derechos ciudadanos e imponiendo el clientelismo y la pasividad.

Conozco sus rasgos principales, pues contra ellos es que mis denuncias han chocado, no sólo en lo que PPK significa, sino, en los nuevos personajes que se articulan para formar parte del imaginario correspondiente. Sus rasgos se dibujan y muestran su vocación hegemónica y entraña autoritaria. Pero todavía están en pugna las dos Repúblicas, al existir el inmenso movimiento

de ciudadanía, todavía disperso, que reclama afianzar la nación. De todos modos se puede apreciar claramente lo que constituye la República Lobbyista...

- a) Se proponen una Des-topia, un sin-lugar. Esto es, reducir el territorio a un lugar sin nación soberana, solo espacio de flujos del mundo global. El Estado y la élite económica, se reducen a intermediarios para la entrega de los recursos naturales y medios de producción. Imponen la reprimarización exportadora general de la economía, en un inexistente libre comercio mundial sin naciones. Las grandes corporaciones transnacionales y los servicios de intermediación económica, casi no tributan, en proporción a sus ingresos, con regímenes tributarios de excepción, dejando sus aportes en fondos privados.
- b) Establecen un régimen de gobierno autoritario, con nueva mixtura entre el poder político y el económico, disfrazado con instituciones democráticas desvirtuadas como anémicos cascarones de fuegos artificiales. Entrelaza el hiperpresidencialismo con la concentración empresarial corporativa. El hiperpresidencialismo controla los diversos poderes institucionales (ejecutivo, parlamentario y judicial), y ha recentralizado la administración pública. Se entrelaza con la más alta concentración corporativa de la propiedad empresarial, en un puñado reducido de monopolios y oligopolios, cuyas plusvalías dependen más del favor político que de la innovación productiva. En esta modalidad presidencialista-corporativa, se adoptan las decisiones reales sobre los bienes nacionales en un gobierno oculto, no público, y alejado de los sistemas de control. Todo está en subasta, y se hace desde este gobierno oculto. Dejan a los cuerpos de representación nacional, regional y local, el ejercicio de una política transformada

- en espectáculo, sobre asuntos banales, ajena a los reales intereses de la nación y los ciudadanos
- c) Corporativizan el territorio, al entregar los recursos naturales y su aprovechamiento a grandes corporaciones mundiales, desarticulando el mercado nacional para fracturarlo en un archipiélago de neo-enclaves minero-energético-pesqueros-madereros. Estos neo-enclaves asumen funciones públicas de gobierno respecto a decisiones, recursos y usos localizados (agua, suelo, bosques, etc.) de los territorios, manejando como recursos privados fondos que deberían ser ingresos tributarios y del presupuesto público de los gobiernos locales, regionales y nacional.
 - d) Pretenden secuestrar la opinión pública de los grandes temas nacionales y de la humanidad, reemplazándola por la «verdad» de un espacio mediático disciplinario. Este es construido desde el control de los grandes medios de comunicación, cada vez más concentrados en pocas empresas, que se cuadran desde la élite lobbyista en crecimiento. Este espacio mediático, forja consumidores frenéticos despersonalizados, atados a la inmediatez pragmática de una combinación de entretenimiento, espectáculo y presente fugaz, con lo que se busca deformar su rol activo como ciudadanos. La pauta sistémica los coloca como oficinas de propaganda de los centros neurálgicos del poder, a los que cubren, ocultan y/o legitiman, y asumen ocasionalmente funciones de cohesión partidista y de gran elector, ante ciertos asuntos claves de la nación.
 - e) La élite de esta República, que abandona desde la partida a la nación y la soberanía, superpone la función pública con la actividad privada. Se ubica en las actividades de gestión de intereses privados globales, desde la función pública. Se reduce a obtener los ingresos que corresponden estrictamente a la intermediación de las estrategias de

grandes negocios privados, sin que existan planes ni políticas públicas en función del interés nacional. Es el reino falaz de los tramitadores, tinterillos, facilitadores, asesores financieros especulativos, que se resumen en la figura del Lobbyista. Hasta propugnan una inútil ley de registro de inscripción de «lobbys», no para ellos, sino para los tontos que se la creen. Es una élite a la que no le interesa ser empresaria productiva, invertir excedentes en ampliar la acumulación, innovar en productividad, mejorar el capital humano, social e institucional. Sólo busca obtener su parte alícuota del gran negocio de alguna estrategia que no les incumbe ni les interesa.

- f) Su ética pública es la de la expropiación de lo público, para capturar en redes privadas la decisión sobre bienes nacionales, e intermediar con ellos ante las estrategias de negocios globales que buscan representar. Su ética pública, sin nación, sin esfera pública, sin opinión pública, sin comunidad ciudadana, se reduce a obtener para sí el «peso político-institucional», oculto, privado y por negocio particular. De este modo, puede obtener recursos que perpetúen su posición y funciones en el sistema lobbysta. Pero esta «ética pública» es imposible de generalizarse, y está contrapuesta a la de la mayoría. Por eso, para la población, la élite lobbysta busca generalizar la corrupción a pequeña escala, con el clientelismo pragmático egoísta, para imponer la pasividad despolitizada, ajena a los sistemas de decisión y a los grupos ahí asentados.

Los grupos que propugnan ser la nueva élite de la República Lobbyista tienen un microcosmos de vida propio, un club exclusivo, en el que todos los integrantes saben las artimañas, fechorías y virtudes de los otros. Pueden traicionarse y espionarse en hacer negocios, pero es una regla de oro que no pueden hablar nada sobre ellos, ni de las traiciones ni los espionajes, fuera del club

exclusivo. Aquello que deciden tratarlo en forma oculta, no atraviesa las mesas de redacción de los medios de comunicación, ni se incluye en los temas de los cuerpos de representación.

Tienen esferas progresivas de actuación, que imitan vergonzantes las jerarquías de las familias oligárquicas, y remedan mal las escuadras de las mafias. El eje del poder es el del «emperador». Es por lo general un atributo individual, inscrito en la persona del lobbysta. Por lo tanto, intransferible. Cuando se afianza, forma alrededor un remedo de corporación o una familia. Tiene por lo general un estado mayor, altamente preparado, que es su brazo ejecutivo real, de la mayor confianza, pero sin posibilidades de ser herederos, y actuando segmentadamente. Organizan varias esferas, que son nodos activos de soporte de la maraña empresarial, tras la que manejan sus negocios y sus interfaces públicas y privadas. Algunos de sus ejecutivos centrales tienen a cargo las cofradías de venta de imagen y/o de influencia, en las que asocian a personas diversas, y en las que se intercambian dones, favores, prebendas, siempre con la reserva del caso. Estas esferas progresivas forman el mundo sagrado del lobbysmo. Los que están fuera de ellas y, peor, los que las denuncian, pasan a la condición de herejes, o de demonios, en todo caso, de peligros públicos, a los que hay que silenciar, cuando no se les puede comprar.

Puertos y gas, ejes de la nación en disputa

Para el lobbysmo todo es posible negocio, pero saben bien que algunos asuntos son más negocios que otros. Ya he señalado, que no crean valor sino reciben una migaja del valor que otros crean. De ahí que los negocios que prefieren tienen que ver con esta condición. Están centrados en asuntos vinculados a decisiones sobre obras públicas, a tramitaciones de préstamos públicos y privados, a manejos de nodos logísticos intermodales que reciben ingresos por peaje, a privatizaciones de activos públicos, a negociaciones

de contratos para explotar recursos naturales, a servicios de intermediación y especulación.

Los temas por los cuales he sido querellado, tocan fibras altamente sensibles en la República Lobbysta. Son de importancia organizadora de la economía nacional. Son estratégicos para la nación, y por eso mismo, tienen un valor geopolítico adicional, lo que también tiene cotización en el mercado lobbysta. Mis investigaciones, denuncias y cuestionamientos a PPK, son sobre estos asuntos públicos, noticiables y fiscalizables, en los cuales su gestión pública, mezclada con intereses privados, se contraponen con las alternativas que requiere la nación. Vale la pena un recuento de los dos ejes centrales: puertos y gas.²

En los puertos públicos, la disyuntiva entre las dos repúblicas es clara.

La propuesta nacional democrática, comprende el desarrollo del sistema portuario nacional, modernizando la Empresa Nacional de Puertos S.A (Enapu) y atrayendo capital privado de primer nivel para infraestructura nueva. Con el Callao como megapuerto competitivo, los puertos interoceánicos de Paita e Ilo; los puertos internacionales de Matarani, Salaverry, Callao y Pisco; y los puertos fluviales de Iquitos, Yurimaguas y Pucallpa; todos ellos en los grandes ejes de integración continental, con ciudades puertos con zonas económicas de valor agregado logístico de desarrollo especial.

La política lobbysta es también clara. Liquidar Enapu y desarticular el sistema portuario nacional, para entregar la infraestructura portuaria estatal al grupo naviero portuario chileno (Von Appen, Claro, Urenda), anulando la condición geopolítica interoceánica de Paita e Ilo, encerrando los puertos fluviales amazónicos en ámbitos interregionales, privilegiando los muelles de minerales en Callao y Salaverry, y haciendo de Tramarsa, buque insignia

² Estos y otros temas de estructura empresarial, se amplían detalladamente en el libro *La República Lobbysta*.

del grupo chileno, el principal operador portuario de los puertos públicos y privados. Desde esta posición, buscan negociar con Dubai Ports, para un duopolio en el Callao. El ilegal y corrupto modelo de privatización de Paita, es actualmente su prueba de fuego para generalizarlo e imponerlo.

En el gas de Camisea, también la pugna estratégica entre las dos repúblicas es clara.

La propuesta nacional democrática es que las reservas de gas de los lotes 88 y 56, deben ser dedicadas al mercado nacional, en el marco de un Plan Energético Nacional de Seguridad y Autosuficiencia Energética, con Petroperú y Electroperú como empresas estratégicas claves, que atraigan socios privados en actividades específicas. Se podrá así contar con una energía suficiente y barata, requerida por el desarrollo nacional, y se podrá usar el gas como insumo para generar la industria petroquímica. Una vez garantizadas las reservas para el abastecimiento nacional de 20 años continuos, las nuevas exploraciones que descubran reservas adicionales pueden ser exportadas.

La política lobbysta impone exportar el gas de Camisea a Chile y México, y liquidar Petroperú y Electroperú, habiendo ya ocasionado la actual crisis energética. Además, amenaza con bloquear estructuralmente el desarrollo nacional, al hacer que la energía sea insuficiente, cara y dependiente.

¡A más ciudadanía, menos corrupción!

En las últimas décadas, la lucha anticorrupción es una vertiente fundamental de la lucha de ciudadanía. Se está formando desde la sociedad una nueva ética pública, que es sustantiva para la nación y la república de ciudadanos libres, iguales y solidarios. A medida que se amplían los derechos y libertades, que se robustecen las fuerzas sociales, que se diversifican los espacios públicos, es cada vez más claro, que sólo con mayor ciudadanía habrá menos corrupción.

He tenido activa presencia en esta larga lucha. Presento en el libro *La República Lobbyista*³ un recuento de algunos de sus casos emblemáticos en los que he tenido participación. Se podrá apreciar como se bifurcan los caminos. A medida que pugna por instalarse, la República Lobbyista recurre a una «ética pública» para privatizar lo público en su carácter intermediador, mezclando las reglas corruptas de las repúblicas militar-guanera, oligárquica y autocrática neoliberal. Esto hace más sistémicas las acciones de corrupción, hasta orillar su instalación en las más altas esferas del poder. Contra esta creciente corrupción, la ciudadanía no se pierde en la pasividad, sino que genera una nueva ética pública, de responsabilidad, servicio y bien común de la nación, para la libertad, la justicia y la solidaridad.

La pugna entre las dos repúblicas tiene en sus contrapuestas éticas públicas, uno de sus aspectos más saltantes, como lo muestra nuestra propia historia. De esta lucha, dependen sus posibilidades de futuro.

³ Dammert, Manuel. *La República Lobbyista. Desnacionalización, corrupción y recorte de libertades ciudadanas, amenaza contra la democracia peruana en el siglo XXI*. Manuel Dammert. Lima, 2009.